

El bulo de las recusaciones del PP se desbarata en el pleno del Constitucional

Un magistrado conservador desmiente la noticia en que se basaron los populares

JULIO M. LÁZARO

El bulo de la triple recusación del PP contra otros tantos magistrados del Tribunal Constitucional se desbarató ayer en el pleno que celebró este organismo. El magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas presentó un escrito en el que desmiente de forma categórica la información publicada por el diario *El Mundo*, que había servido de base para las citadas recusaciones. En esa información se señalaba que tres magistrados progresistas se habían mostrado favorables a la reforma de la Ley Orgánica del Constitucional (LOTIC), sobre la que se tenía que pronunciar el propio tribunal en una reunión celebrada el pasado 12 de junio. El PP se acogió a esta circunstancia para recusarles. Rodríguez Arribas señala en su carta que en aquella reunión "no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora de la LOTIC". "Tampoco yo dije", remacha, "que me reservaba las opiniones para el pleno".

El Tribunal Constitucional aplazó ayer el pleno de las recusaciones de cinco de sus miembros para dar traslado a las partes (Gobierno, PP, Congreso y Senado) de la carta redactada por seis magistrados, entre ellos el vicepresidente conservador Guillermo Jiménez y el magistrado del mismo sector Ramón Rodríguez Arribas, en la que desmienten la información publicada en el diario *El Mundo* y que sirvió como elemento fundamental para que el PP razonase la recusación de tres magistrados progresistas.

Informaciones falsas

El PP ya manifestó el pasado lunes a preguntas de este periódico que no retiraría la recusación pese a conocer que estaba basada en informaciones falsas. Los seis magistrados participantes en la reunión a la que se aferraba el PP para su recusación desmintieron en una carta dirigida a Vicente Conde, presidente accidental al abstenerse Casas por considerarse parte interesada en el litigio, que la información de *El Mundo* respondiese a la realidad de lo tratado. Y ayer, en el pleno donde se trató la cuestión, el magistrado conservador Ramón Rodríguez Arribas remachó los argumentos presentando un último escrito en el que añade que tampoco dijo que se reservaría sus opiniones para el pleno.

Según las distintas fuentes consultadas por este periódico, en la providencia que se dará a conocer hoy, las partes, es decir, el Gobierno, el Congreso, el Senado y el PP podrán ver la carta de Conde convocando el pleno de 10 magistrados para examinar las recusaciones y las respuestas que le hicieron llegar los magistrados, incluidas las de los conservadores recusados por el Gobierno, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, oponiéndose a esa convocatoria.

Además, el Tribunal Constitucional dará traslado a las partes para alegaciones de la carta de los seis magistrados desmintiendo la información que sirvió de base al PP para presentar la triple recusación, así como los escritos que dirigieron al presidente en funciones los recusados por el Gobierno, Roberto García Calvo y Jorge Rodríguez Zapata, oponiéndose a su vez a que se de a la carta la categoría de documento.

García-Calvo y Rodríguez Zapata entienden que esa carta carece de relevancia jurídica y no debe darse de ella traslado a las partes. Por ello, ambos presentarán un voto particular al texto de la providencia. También se dará traslado de la carta del magistrado conservador Rodríguez Arribas entregada ayer al pleno desmintiendo de nuevo la información de *El Mundo*.

Toda esta situación dilata la vista de la admisión de las recusaciones, cuya tramitación ni siquiera ha sido abierta. El Constitucional afronta uno de los momentos más críticos de toda su historia a cuenta de un rosario de recusaciones que amenaza con bloquear su funcionamiento. Los magistrados se encuentran ante el problema de no poder convocar el pleno por falta de quórum si los recusados no participan en las deliberaciones.

“En aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la ley”

J. M. L.

La carta de Ramón Rodríguez Arribas, a la que ha tenido acceso este periódico, recuerda que él es uno de los seis participantes en la reunión del 12 de junio. En relación con la noticia recogida por *El Mundo* el pasado 25 de octubre y conforme a lo manifestado por él en el pleno, el magistrado copretende dejar constancia de lo siguiente:

“El referido escrito (se refiere a la carta de los seis magistrados desmintiendo la versión de *El Mundo*) lo firmé en la creencia, ahora veo que equivocada, de que, al estar dirigido a V.E. a los efectos que pudieran resultar operativos, no iba a tener acceso a las actuaciones, ya que sólo pretendían poner, negro sobre blanco, si lo hablado en el despacho de la Presidenta estaba o no en consonancia con la referida noticia periodística”.

"De haber comprendido que el documento se incorporaría a las actuaciones hubiera puesto en primer lugar que se trataba de una prueba preconstituida. En segundo lugar, que cuando menos resultaba inconveniente que junto con mi firma figurasen las de dos abstenidos y los de tres pendientes de recusación”.

Finalmente, que aunque el contenido del documento responde a la verdad, no responde a toda la verdad. En efecto, corresponde a la verdad que contra lo expuesto en la noticia del periódico (Zapata se refiere a la información de *El Mundo*), en aquella reunión no se habló de la constitucionalidad de la ley reformadora de la LOTC, que nadie propuso la celebración de una conferencia de prensa y que tampoco yo dije que me reservaba las opiniones para el pleno”.

"Ahora bien, también es verdad, como por cierto, en parte ha aparecido en noticias de prensa, concretamente en EL PAÍS, que manifesté que la reforma legal era fruto de la desconfianza de los políticos, que esa desconfianza era injusta porque no hubiera sido posible remover la presidencia al vencimiento del término del mandato e incluso llegue a jurar que personalmente no adoptaría ninguna determinación en ese sentido, proponiendo la dimisión de la presidenta y el vicepresidente y la convocatoria de un pleno para su ratificación”.

El País, 16 de noviembre de 2007